

RECIBE: Edu HORA: 9:10

Corr. 10

(78) 1

[Handwritten signature]

NÚMERO DE EXPEDIENTE 78

IMPEDIMENTO PRESENTADO POR ALEJANDRA MARIELENA REYES CARRANZA

**COMISION DE POSTULACION PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE GUATEMALA.**

DASMA JANINA GUILLEN FLORES de cincuenta y dos años de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria, con domicilio y residencia en el Municipio y Departamento de Quetzaltenango, me identifico con Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación dos mil trescientos sesenta y cinco, cero cinco cuatrocientos veinticuatro, cero doscientos tres extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala, dentro del expediente supra identificado, atentamente me dirijo de conformidad con los siguientes:

I-) DE LA AUDIENCIA CONFERIDA:

Fui legalmente notificada del archivo en formato digital que contiene señalamientos y documentos que se incorporan al mismo de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, en donde se me hace saber lo relativo al impedimento presentado oportunamente EN ESTE CASO HAGO REFERENCIA AL ESCRITO PRESENTADO POR **ALEJANDRA MARIELENA REYES CARRANZA**, y en donde se me concede el plazo de cinco días para presentar las pruebas de descargo y estando en tiempo comparezco a evacuar dicha audiencia.

II.-) DE LA PERSONA QUE DENUNCIA:

La señora **ALEJANDRA MARIELENA REYES CARRANZA**, es una persona que

I

desconozco y que no tiene base legal a diferencia de mi persona, ya que puedo demostrar que nunca he estado vinculada a proceso penal directamente.

Entiendo que la denuncia o impedimento presentado por **ALEJANDRA MARIELENA REYES CARRANZA** no tiene ningún sustento legal, toda vez que la información que presenta la basa únicamente en medios de información recabados en internet a través de la página web de Prensa Libre y cuyo objeto es tratar de dañar mi imagen e idoneidad como postulante al cargo de Magistrada para la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala.

Refiere la interponente del impedimento, que existe información encontrada en internet, en donde se me relaciona supuestamente con el abogado ROBERTO LOPEZ VILLATORO, sin que exista ningún proceso tanto en el Ministerio Público como en algún Órgano de Justicia en mi contra, es entonces que los argumentos expuestos por Alejandra Marielena Reyes Carranza sobre mi supuesta vinculación con el abogado ya en mención, es una simple aseveración, sin fundamento fáctico, jurídico y probatorio, ya que no existe en mi contra ni siquiera una investigación ante cualquier Órgano del Estado, que pueda vincularme con la persona que la denunciante refiere, es por ello no pueden ser tomados en cuenta esos argumentos para indicar que yo no soy IDONEA al cargo para el cual me postulo.

III.- DE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN:

Derecho de ser protegida en mi calidad de Mujer.

Es importante analizar que en mi posición de mujer tengo derecho a ser protegida, esto de conformidad con lo que regula el numeral tres de las cien reglas de

protegida por un manto de inocencia de conformidad con lo que para el efecto regula el artículo 14 de nuestra Carta Magna, extremo sustentado con la apelación de sentencia de amparo número 1281-96 emitida por la honorable Corte de Constitucionalidad en fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, la cual tiene relación al presente impedimento presentado por Alejandra Marielena Reyes Carranza, ya que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad ya relacionada, se refiere precisamente a publicaciones de señalamientos infundados hacia el amparista Baudilio Teodoro Avila Lemús, señalamientos que fueron infundados y por ende la honorable Corte de Constitucionalidad concedió la Apelación de Amparo solicitada, en base a los derechos que se consideraron conculcados siendo esos el derecho al debido proceso, presunción de inocencia y principio de legalidad, en dicha resolución la Corte de Constitucionalidad realizó la siguiente consideración: *"(...) Este precepto, que entra en armonía con el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 14 de ese cuerpo de normas fundamentales, conlleva diversos objetivos, pero para el caso puede inferirse uno básico y de carácter garantista que tiende a proteger entre otros aspectos no sólo el derecho a la honra y la dignidad del que se ha hecho mérito, sino también la seguridad y, ante todo, el derecho a la intimidad de aquel individuo que se ve sometido a persecución penal por parte del Estado. Esta protección no debe entenderse limitada sólo a favor de quien se presume vinculado en la comisión de un ilícito penal, sino que con mayor razón a favor de quien por error -atribuido a autoridad administrativa o judicial- ha visto aparecer su nombre y su imagen -como elementos que lo identifican- en un medio de comunicación social, sindicado de participar en aquella comisión. (...)"*

Así mismo a nivel internacional, se cuenta con el artículo 11 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos el cual establece lo siguiente: **“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.** 1. *Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.* 2. *Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.* 3. *Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”* Sumado al anterior artículo, se debe tomar en cuenta el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece la **“Presunción de inocencia y publicidad del proceso.** *Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. (...)*”

De conformidad con lo antes citado, la jurisprudencia y normas citadas, son atinentes a mi caso en concreto, PORQUE A TRAVÉS DE UN PORTAL DE INTERNET SE HA INTENTADO VINCULARME O MENCIONAR MI NOMBRE RELACIONÁNDOME CON EL ABOGADO ROBERTO LÓPEZ VILLATORO, QUIEN ENFRENTA UNA INVESTIGACIÓN EN LA CUAL NO SOY PARTE Y POR ENDE NO PUEDE SER UTILIZADA EN MI CONTRA, es por ello que con base a lo que establece la jurisprudencia y normas ya relacionadas, debe ser protegido mi derecho de presunción de inocencia, AL HABER SIDO DAÑADA MI IMAGEN y mi nombre al aparecer vinculada a una noticia, sin ningún tipo de fundamento para hacerlo.

Protección a la Independencia Judicial:

En un sistema democrático la Independencia en los jueces, genera seguridad jurídica de sus fallos y conlleva a una imparcialidad, que asegura la tutela judicial efectiva para cada persona o actor dentro de una causa, esto independientemente

de la rama que se litigue, el artículo 203 de nuestra Carta Magna, que claramente refiere que solo estamos sujetos a la Constitución Política de la República de Guatemala y las Leyes, esta base legal es superior a cualquier interpretación, es lo que debe tomarse en cuenta en el presente caso, **y no un simple señalamiento basado en un portal de internet** específicamente de la página Web de Prensa Libre.

Llevo diez años siendo magistrada de Sala y mi conducta ha sido intachable, nunca he sido juzgada por ningún delito, ni sujeta a investigación penal y tampoco sancionada, por lo tanto, los señalamientos espurios y sin fundamento, no pueden atentar contra la independencia judicial de la calidad que ostento y estoy revestida de conformidad con la ley.

IV.- DE LOS SEÑALAMIENTOS, LAS PRUEBAS DE DESCARGO, SUS ARGUMENTOS Y LAS CONCLUSIONES:

Los señalamientos en mi contra:

Inicio de la siguiente forma, la denunciante en este caso, solo basa sus señalamientos tal como lo refiere en la página web que cita la interponerte del señalamiento y en un supuesto informe de impunidad y redes ilícitas, que menciona en su denuncia, ahora bien, tales medios no pueden considerarse suficientes para afectar mi honorabilidad. En concreto los señalamientos hechos para mi persona, son los siguientes:

1.- Se evidencia el conflicto de interés que puede suscitar por parte de la aspirante, en virtud de estar relacionada con personas involucradas en casos de corrupción, razón por la cual no puede competir con el resto de profesionales, en virtud que, de ser seleccionada, podría verse influenciada en sus resoluciones e incurriría en prácticas indebidas.

|

2. Al elegir a Dasma Janina Guillen Flores se estaría violentando el principio de independencia judicial, independencia a la garantía de elegir a candidatos idóneos, capaces y honorables contemplados en los artículos constitucionales 203 y 113.

3. Con el objeto de garantizar la imparcialidad del proceso de Comisiones de Postulación, se hace necesario que en todos los casos en los que se den estas situaciones sean evidenciados y erradicados.

Como se puede observar, los señalamientos se dirigen en forma individual a mi persona, sin embargo, al analizar la página web o notas de prensa que presenta la denunciante, se refiere a una cantidad de más de veinte personas, lo que constituye un ataque personal.

Simplemente notas de prensa o publicaciones web, o de un medio de comunicación no pueden ni deben ser tomados en cuenta para afectar mi inocencia y mi honorabilidad como Magistrada.

Ahora bien analicemos lo relevante a los señalamientos en mi contra, a través de ello se concluye que no existe ningún hecho relevante que pueda afectar mi honorabilidad en los señalamientos realizados, partiendo que su base es una publicación web de Prensa Libre, si bien es cierto los medios de comunicación tienen derecho a la libre expresión, de conformidad con la Ley Constitucional de Libre Emisión del Pensamiento, ya que es posible en nuestro medio que dicha publicación pueda ser tomada como una libre emisión del pensamiento, mas no debe considerarse como una condena en contra de las personas, en muchas ocasiones los medios de comunicación publican información en base a lo que entienden o interpretan, pero no deben ser tomadas en cuenta cuando no se basen en resoluciones judiciales y en consecuencia estigmatizarme, violando mi

4
27/01/21

derecho a la presunción de inocencia.

A la fecha no estoy vinculada a ningún proceso penal, ni en fase de investigación judicial en relación a los hechos que me señalan, en todo caso, eso debió probar la denunciante y no basarse únicamente en suposiciones sin fundamento ahora bien indica que en el actual periodo yo fui nombrada con el aval del señor Roberto López Villatoro, quien según ellos es acusado por el delito de cohecho activo (del cual no tengo conocimiento por no tener ningún tipo de relación con dicha persona). Sustentar tales extremos significaría decir que el nombramiento de toda la Corte Suprema de Justicia actual o por lo menos de más de la mitad **NO ES LEGÍTIMA**, lo cual no es posible, pues no existe fundamento serio para sustentar simples aseveraciones que también significaría ilegitimar mi nombramiento que está por terminar.

Ahora bien, la denunciante se fundamenta en una simple publicación web de prensa libre que indica que la Corte Suprema de Justicia actual está sujeta a una cadena de favores, publicación que no tiene sustento de ningún tipo.

Dentro de los señalamientos que se me hacen refiere que mi nombramiento podría violentar el principio de independencia judicial, independencia a la garantía de elegir a candidatos idóneos, capaces y honorables, contemplados en los artículos constitucionales 203 y 113, al estar vinculada con supuestos grupos de corrupción, lo cual no es cierto, pues de conformidad con el artículo 203 de nuestra Carta Magna, solo estoy sujeta a la Constitución y a las Leyes del País, en igual sentido ella indica supuestos, que no tienen ningún sustento legal, por lo que una vez más reitero que no existe ninguna vinculación mía al caso en concreto del señor Roberto López Villatoro, ni con ninguna otra persona, por lo que no puede juzgarse mi actuar a hechos que no han sucedido o como la denunciante indica

|

podrían suceder, cómo es posible que mi **HONORABILIDAD y HONRADEZ** estén supeditadas a **SUPUESTOS DE HECHO DE COSAS QUE PUDIERAN SUCEDER Y QUE NO HAN SUCEDIDO** y que solo existen en la mente e imaginación de la interponerte.

De las Pruebas de Descargo:

Tal como lo he reiterado en los párrafos anteriores, se establece que no existe un medio de prueba que sustente que yo me encuentro vinculada a algún proceso penal, ni de investigación judicial, en relación a la persona que hacen ver, más que una simple publicación web de Prensa Libre, por tal motivo la prueba que ofrezco es la siguiente:

- 1.- Constancia de Antecedentes Policiacos de fecha siete de febrero de dos mil veinte emitida por Dirección General de la Policía Nacional Civil, con lo que pruebo mi inocencia, honorabilidad y que no he sido vinculada a ningún Proceso Penal o procedimiento policial, medio de prueba con el cual demuestro que una simple publicación web de prensa libre no puede desvanecer tal circunstancia.
2. – Constancia de Antecedentes Penales de fecha siete de febrero de dos mil veinte emitida por el titular de la Unidad de Antecedentes Penales del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, medio de prueba con el que demuestro mi honorabilidad y que no he sido vinculada a ningún Proceso Penal, medio de prueba con el cual demuestro que una simple publicación web de Prensa Libre no puede desvanecer tal circunstancia.
3. – Constancia extendida por la Licda. Karla Yescenia Lemus Navarro, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en donde hace constar que en relación a los antejuicios tramitados en mi contra los mismos fueron declarados sin lugar, en ese sentido, se entiende entonces que no existe denuncia, ni imputación

I

en mi contra, por lo que la denuncia presentada en mi contra no tiene sustento, así como los señalamientos hechos en mi contra, que no existen otros procesos en mi contra, que no existe más que un sustento a través de una publicación vía web.

De las Conclusiones;

De la interpretación a los derechos que me asiste, de la doctrina legal citada a mi favor, de la interposición de los señalamientos y la prueba de descargo que se propone por mi parte se puede concluir en lo siguiente:

- 1.- Acoger el señalamiento de la interponente violentaría, mi derecho de defensa y principio de inocencia, consagrados en nuestra Carta Magna, pues como se hizo ver una simple publicación web de un medio de comunicación, no puede sustentar imputaciones de la gravedad y magnitud que pretenden hacer en mi contra.
- 2.- El hecho de que exista un proceso en contra de Roberto López Villatoro, no puede ser imputable a mi persona, pues no tengo ninguna vinculación con dicha persona y el derecho penal es personalísimo y si dicha persona tiene algún tipo de reproche penal, lo deberá hacer ante la instancia correspondiente y no mi persona sufrir las consecuencias, ni ser afectada en mi honorabilidad por el actuar de dicha persona.
- 3.- La denunciante no presenta un medio de prueba eficaz que sustente sus aseveraciones en mi contra, por lo tanto, no puede tomarse en cuenta la tacha y/o denuncia presentada en contra de mi honorabilidad.
- 4.- Deben ser respetados los derechos que como mujer me asisten, más aún el principio de inocencia que me asiste y proteger debidamente la independencia judicial, que no está supeditada más que a nuestra Carta Magna y no a señalamientos espurios sin fundamento, tal como fue citada en la jurisprudencia relacionada, si mi nombre e imagen estuvo vinculada o mencionada, debe

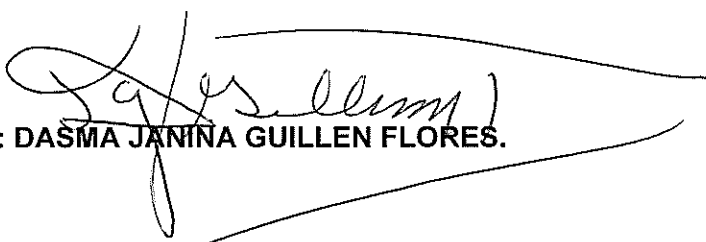
|

respetarse mi derecho a la presunción de inocencia.

V.- PRETENSION:

De conformidad con lo ya expuesto solicito se tenga por evacuada la audiencia conferida, por ofrecidos y aportados los medios de prueba de descargo en contra de los señalamientos, denuncia y/o tacha presentada en mi contra por la señora **ALEJANDRA MARIELENA REYES CARRANZA**, y como consecuencias las mismas no sean tomadas en cuenta, pues emanan únicamente de señalamientos espurios y denuncias falsas, que atentan contra mi honorabilidad e idoneidad, lo cual ya fue aclarado por mi persona, en virtud de ello debe continuarse con el trámite normal en relación al procedimiento de selección en el que me encuentro, no encontrando ningún sustento o límite en relación a la denuncia puesta en mi contra.

COPIAS: adjunto al presente memorial fotocopias del mismo. Quetzaltenango, doce de febrero de dos mil veinte.


DOCTORA: DASMA JANINA GUILLEN FLORES.

Comprobante No. 46839705-75111

DIRECCION GENERAL
POLICIA NACIONAL CIVIL

BOLETA No. 7511081

FORMA MG-DPNC-SCC-S-V

SERIE B

CERTIFICA

Que de conformidad a los registros de Archivo de la Policía Nacional Civil de Guatemala:

Basma Janna Guillen Flores

Código Verificación

46060326

23650542402D3

Número de Documento de Identificación

NO

<http://antecedentes.pnc.gub.gt>

TIENE ANTECEDENTES POLICIALES

Y para los usos legales que al interesado (a) convengan, se extiende la presente certificación, en la ciudad de Guatemala, el

07 de Febrero del 2012

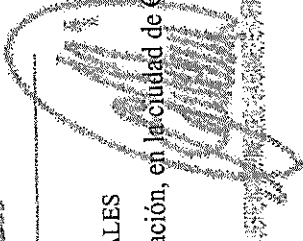
Válido por 2400 meses

Fecha/Hora Recepción: 2012-02-07 08:28:07 AM

Fecha /Hora Emisión: 2012-02-07 08:28:07 AM



Carmita Ibarra
Contrata 41 - Quetzaltenango





ORGANISMO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
GUATEMALA, C. A.

Boleta Electrónica No.
D2020-0273238

EL INFRASCRITO TITULAR DE LA UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES HACE CONSTAR QUE
CONFORME LOS REGISTROS RESPECTIVOS A:



Nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido
DASMA JANINA	GUILLÉN	FLORES

QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DPI NUMERO 2365 05424 0203

*** NO LE APARECEN ANTECEDENTES PENALES ***

Fecha de Emisión: 07/02/2020
Vigencia: Válida hasta 06/08/2020
Fecha de Nacimiento: 20/06/1967
Lugar de Nacimiento: EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN

DIRECTOR
Unidad de Antecedentes Penales
xfDSTrgCiFJ2ORgBIOrjFA==

Operador: MMVASQUEZ
21DA0C8410C1ED77840DD8539B47469B

Solicitud No.S2020-0390792
Solicitante: DASMA JANINA GUILLÉN FLORES

Llave: 20200201055019

Los datos de esta boleta deben ser verificados en:
<https://cape.oj.gob.gt>



Digitally signed by
ORGANISMO
JUDICIAL
Date: 2020.02.07
09:09:21 CST
Reason: Constancia
de Carencia de
Antecedentes
Penales
Electrónicos (CAPE)
Location:
<https://www.cape.oj.gob.gt>

Este documento tiene un límite de 4
validaciones.

Acuerdo de la Corte Suprema de
Justicia. No. 27-2018

Guatemala, 07 de febrero del 2020

***** Ultima línea *****



8
[Handwritten signature]


LA INFRASCRITA OFICIAL MAYOR DE LA SECCIÓN DE ANTEJUICIOS DE LA CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, HACE CONSTAR:

Que se tuvo a la vista los registros físicos de los expedientes de antejuicio de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y los correspondientes a la Sección de Antejuicios de la Cámara de Amparo y Antejuicio, de los años dos mil nueve (2009) al dos mil diecinueve (2019), en relación a los cuales se estableció que a la abogada: **DASMA JANINA GUILLÉN FLORES**, le aparece registro de los antejuicios promovidos en su contra: número doscientos tres guión dos mil quince (203-2015) declarado sin lugar; numero doscientos seis guión dos mil quince (206-2015) rechazado en forma liminar oportunamente.-----

**CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA**
GUATEMALA, C.A.

Y para los usos personales que a la interesada convengan, extendiendo, numero, sello y firmo la presente constancia en una hoja. En la ciudad de Guatemala, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

[Handwritten signature]
Licda. Karla Yescenia Lemus Navarro
Oficial Mayor de la Sección de Antejuicios
De la Corte Suprema de Justicia



PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

9
2/5/96

EXPEDIENTE No. 1281-96

APELACION DE SENTENCIA DE AMPARO

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.

En apelación y con sus antecedentes se examina la sentencia de tres de septiembre de mil novecientos noventa y seis dictada por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en el amparo promovido por Baudilio Teodoro Avila Lemus contra el Ministro de Gobernación. El postulante actuó con el patrocinio del abogado José Arturo Morales Rodríguez.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) Interposición y autoridad: presentado el treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis en la Corte Suprema de Justicia. B) Acto reclamado: publicaciones de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y seis efectuadas por la autoridad impugnada en los periódicos Siglo Veintiuno, Prensa Libre y El Gráfico en las que aparece el nombre y fotografía del postulante indicando que se encuentra detenido por el delito de secuestro. C) Violaciones que denuncia: derechos al debido proceso, presunción de inocencia y principio de legalidad. D) Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por el postulante se resume: a) con base en información rendida por el Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional la autoridad impugnada hizo publicar el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, en los periódicos Siglo Veintiuno, Prensa Libre y El Gráfico, los nombres y fotografías de cuatro personas, incluido él (el postulante), de quienes se señaló que pertenecen a una banda de criminales y que se encuentran sindicados y detenidos por la comisión del delito de secuestro. Tales publicaciones aparecieron, según su propio texto, con el objeto de que por medio de la línea telefónica 110 cualquier persona aportara datos al proceso y a la investigación promovida; b) el acto que ahora reclama le causa agravio ya que sin que hubiere cometido ningún delito y sin estar sujeto a investigación penal, la autoridad impugnada inició persecución de esa índole en su contra, provocando así descrédito a su persona y a su familia. Solicitó que se le otorgue amparo y, como consecuencia, que se le ordene a dicha autoridad que haga publicar en la misma forma y en los periódicos aludidos la aclaración pertinente. E) Uso de recursos: ninguno. F) Caso de procedencia: invocó el contenido en el inciso a) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: citó los artículos 2o., 5o., 12 y 14 de la Constitución Política de la República; 7o., 8o. y 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

II. TRAMITE DEL AMPARO

A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Tercero interesado: no hubo. C) Informe circunstanciado: la autoridad impugnada manifestó: a) como parte de la política a seguir para combatir la delincuencia existente en el País, inició un programa por medio

del cual efectúa publicaciones en los distintos diarios de la República con los nombres y fotografías de las personas que han sido detenidas y consignadas a los tribunales de justicia por el delito de secuestro con el objeto de reunir evidencias suficientes; b) para tal efecto, solicitó al Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional que proporcionara información sobre tales personas; el referido Departamento le envió el nombre y fotografía del postulante junto con la de otras personas, por lo que fueron publicadas en los periódicos Prensa Libre y Siglo Veintiuno el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y seis; c) posteriormente se percató que la información proporcionada estaba equivocada, por lo que por medio de publicaciones aparecidas el catorce de junio de mil novecientos noventa y seis, aclaró dicha situación. D) Remisión de antecedentes: no hubo. E) Pruebas: a) el informe circunstanciado de la autoridad impugnada; b) fotocopia del informe rendido por el Director General de la Policía Nacional a la Sala Décima de la Corte de Apelaciones el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el que consta que fue el Ministro de Gobernación quien ordenó las publicaciones de prensa referidas; c) recortes de prensa que contiene las aclaraciones publicadas por el Ministerio de Gobernación en los diarios Prensa Libre y Siglo Veintiuno, de catorce de junio de mil novecientos noventa y seis. F) Sentencia de primer grado: el tribunal consideró: "...En el presente caso, el postulante del amparo considera lesionados de manera irreparable sus legítimos derechos constitucionales y humanos con la publicación hecha por el Ministerio de Gobernación en su contra, y que ha quedado transcrita en la parte correspondiente de este fallo, y pide que cesen las mismas y se ordene otra de iguales características que indique la falsedad de la que motiva la presente acción. En el informe circunstanciado que rindió a esta Corte el Ministerio de Gobernación, admite el error cometido al haber publicado el veintiséis de mayo del año en curso, en los diarios Siglo Veintiuno y Prensa Libre, el nombre y la fotografía del señor Baudilio Teodoro Avila Lemus, de quien se decía estaba detenido y consignado a los tribunales de justicia, sindicado del delito de plagio y secuestro. Sin embargo, también indica que al advertir el error, se ordenó la publicación de las aclaraciones correspondientes en los mismos medios de información en las que se expone que, por un lapsus calami, se publicaron los nombres y las fotografías, entre los que aparecía el postulante del amparo, y se aclara que éste no se encuentra detenido ni consignado a los tribunales de justicia; el Ministro acompañó fotocopias de las aclaraciones que indica, las cuales fueron tenidas como prueba dentro del presente amparo. Siendo esto último el propósito perseguido con la presente acción, y habiéndose cumplido ya con el mismo, el amparo promovido ha quedado sin materia y como consecuencia, deviene notoriamente improcedente, debiendo así ser declarado en la parte resolutive de este fallo, junto con las demás declaraciones que en derecho corresponde..." Y resolvió: "...a) Deniega por notoriamente improcedente, dada su falta actual de materia, el amparo solicitado; b) Condena en costas al postulante, Baudilio Teodoro Avila Lemus; c) Impone al abogado patrocinante, Licenciado José Arturo Morales Rodríguez, la multa de trescientos quetzales, que deberá hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días de encontrarse firme el presente fallo..."

III. APELACION

El postulante apeló.

IV. ALEGATOS EN EL DIA DE LA VISTA

A) El accionante no alegó. B) La autoridad impugnada reiteró los argumentos expuestos en su informe circunstanciado y solicitó que se confirme la sentencia

impugnada. C) El Ministerio Público alegó que el amparo es improcedente por carecer de materia, ya que al haberse hecho las publicaciones de catorce de junio de mil novecientos noventa y seis, donde se aclara el error cometido, el Ministro de Gobernación ha satisfecho la pretensión que el postulante persigue a través del amparo. Solicitó que se confirme la sentencia impugnada.

CONSIDERANDO

I

El amparo protege a las personas contra las amenazas de violación a sus derechos o restaura su imperio cuando la violación hubiere ocurrido y procederá siempre que las leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.

II

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11, prescribe como derecho de la persona el respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad, y establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Según se colige de la dicción contenida en el artículo 14 *ibid*, un ataque de aquella naturaleza puede cometerse mediante la publicación, en algún medio de comunicación, de informaciones inexactas o agraviantes que se emitan en perjuicio del particular; ese mismo precepto señala también que tal contravención debe ser reparada por medio de la rectificación o la respuesta que debe aparecer en el mismo órgano de difusión en las condiciones que establezca la ley.

El sistema normativo guatemalteco implicó en el ámbito constitucional aquel derecho, pues según lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 13 de la Constitución "Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente." Este precepto, que entra en armonía con el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 14 de ese cuerpo de normas fundamentales, conlleva diversos objetivos, pero para el caso puede inferirse uno básico y de carácter garantista que tiende a proteger entre otros aspectos no sólo el derecho a la honra y la dignidad del que se ha hecho mérito, sino también la seguridad y, ante todo, el derecho a la intimidad de aquel individuo que se ve sometido a persecución penal por parte del Estado.

Esta protección no debe entenderse limitada sólo a favor de quien se presume vinculado en la comisión de un ilícito penal, sino que con mayor razón a favor de quien por error -atribuido a autoridad administrativa o judicial- ha visto aparecer su nombre y su imagen -como elementos que lo identifican- en un medio de comunicación social, sindicado de participar en aquella comisión.

III

En el caso concreto, el Ministerio de Gobernación ordenó la publicación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, en los diarios Prensa Libre, Siglo Veintiuno y el Gráfico, de los nombres y las fotografías de varias personas a quienes se les imputaba haber cometido el delito de secuestro; uno de esos nombres y fotografía

corresponde al ahora accionante. Según aceptó el Ministro de Gobernación (autoridad impugnada) en el informe circunstanciado que rindió, esta última publicación se hizo debido a un error que cometió el Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, razón por la cual el catorce de junio de ese mismo año se hicieron publicar las aclaraciones pertinentes en los diarios anteriormente señalados, habiendo reparado así, según indicó, el agravio producido. Consta en los antecedentes que, en efecto, esta última publicación se hizo pero con inclusión solamente del nombre, mas no de la fotografía, del amparista.

Ya se hizo alusión anteriormente de que el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula que la reparación de un agravio como el que ahora se denuncia debe efectuarse en las condiciones que establezca la ley, siendo ésta en el ordenamiento jurídico guatemalteco la Ley de Emisión del Pensamiento, Decreto número 9 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, -aplicable supletoriamente al presente caso- la que en el artículo 39, al señalar la forma en la que deben publicarse las aclaraciones, rectificaciones o refutaciones a publicaciones ofensivas, establece que las mismas deben "...insertarse en la misma página, columna y caracteres tipográficos en que apareció la alusión o inculpación..."; en cuanto a este último aspecto, que alude a los caracteres tipográficos, debe entenderse, según criterio de esta Corte, que por extensión al concepto aquella aclaración, rectificación o refutación debe hacerse en igual forma que la publicación a la que corresponde.

En ese orden, si en el caso que ahora se enjuicia la publicación que resultó ofensiva contuvo la fotografía del reclamante, entonces también la aclaración que de oficio hizo el Ministerio de Gobernación debió contenerla; esto en procura del derecho a la imagen -contenido en el derecho a la intimidad anteriormente relacionado- que asiste al agraviado. Al no haberse hecho así resulta insuficiente entonces tal aclaración, razón por la cual, al no haber sido reparado en debida forma el agravio causado, es procedente otorgar la protección constitucional pedida, con el objeto de ordenar a la autoridad impugnada que haga aparecer de nueva cuenta en los diarios aludidos aquella aclaración, pero incluyendo no sólo el nombre sino que la misma fotografía del postulante que apareció en la publicación lesiva. Para tal efecto debe revocarse la sentencia venida en grado y dictarse la que corresponde.

IV

De conformidad con lo que establece el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo y podrá exonerarse al responsable cuando la interposición del mismo se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos en que, a juicio del tribunal, se haya actuado con evidente buena fe. Siendo que la actuación de la autoridad impugnada no encaja en ninguno de los casos de excepción referidos debe condenársele al pago de las costas causadas.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la República; 10 inciso a), 42, 47, 49 inciso a), 52, 53, 60, 61, 66, 67, 149, 163 inciso c) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.

11
[Handwritten signature]

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad con fundamento en lo considerado y en las leyes citadas resuelve: I. Revoca la sentencia venida en grado. II. Otorga amparo a Baudilio Teodoro Avila Lemus y, como consecuencia: a) restaura al reclamante la situación jurídica afectada; b) para los efectos positivos de este fallo la autoridad impugnada deberá ordenar que se publique de nueva cuenta aquella aclaración atinente al caso que apareció en los diarios Prensa Libre y Siglo Veintiuno el catorce de junio de mil novecientos noventa y seis, pero en esta oportunidad debe incluirse no sólo el nombre sino que la misma fotografía del postulante que apareció en la publicación lesiva; c) se conmina a la autoridad impugnada a que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que reciba la ejecutoria del presente fallo, bajo apercibimiento de que en caso contrario se le impondrá una multa de tres mil quetzales, sin perjuicio de las demás responsabilidades legales. III. Se condena en costas a la autoridad impugnada. IV. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes.

Alejandro Maldonado Aguirre

Presidente

Ruben Homero Lopez Mijangos

Magistrado

Jose Arturo Sierra Gonzalez

Magistrado

Conchita Mazariegos Tobias

Magistrada

Jose Rolando Quesada Fernandez

Magistrado

Amado Gonzalez Benitez

Magistrado

Carmen Maria Gutierrez De Colmenares

Magistrada

Manuel Arturo Garcia Gomez

Secretario General

»Número de expediente: 1281-96

»Solicitante: Baudilio Teodoro Avila Lemus

»Autoridad impugnada: Ministro de Gobernación

»Clase de Documento: Apelaciones de Sentencias de Amparos

»Tipo de Documento: 1997

»número de expediente: 1281-96

»solicitante: baudilio teodoro avila lemus

»autoridad impugnada: ministro de gobernación

REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA	
Registro Nacional de las Personas - Documento de Identificación - DPI	
CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN CUA	NOMBRE
2365 05424 0203	DASMA JANINA
	APELLIDOS
◀	GUILLÉN FLORES
	NACIONALIDAD
	GTM
	SEXO
	FEMENINO
	FECHA DE NACIMIENTO
20 JUN 1967	
003	FIRMA
	
	
	
	19 NOV 2019

LUGAR DE NACIMIENTO:
EL PROGRESO
SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN
L:68 F:76 P:152

NOMBRE:
QUETZALTENANGO
OLINTEPEQUE

ESTADO CIVIL:
SOLTERA
FECHA DE VENCIMIENTO:
18NOV2029

MÓDULO DE SERIE:
0000028438429

NOMBRE USUARIO:
DASMA JANINA GUILLEN FLORES

IDGTM23650542470203S0903<<<288
6706201F2911180GTM<<9615484362
GUILLÉN<<DASMA<<<<<<<<<<<<<<<